

distas demócratacristianos. Dieron discursos, se pasearon por el mundo y escribieron libros para alabar a los «héroes con uniforme». Sólo meses después, ya en diciembre, se dieron cuenta con angustia de que habían sido utilizados por los generales, que estaban fuera del juego y, lo más horrible, que habían estado glorificando a un grupo de personas que dirigían una carnicería humana contra centenares de miles de chilenos. Carnicería tan enorme que tenía horrorizado al mundo. Se dieron cuenta que cada palabra escrita en favor de los militares después del 11 de septiembre, equivalía al cadáver de un civil chileno, a una mujer violada por la soldadesca, los oficiales e incluso por mandos de altísima graduación, a un hombre castrado con bayoneta, a un cadáver flotando sobre el río Mapocho con las manos atadas a la espalda y la huella de una ráfaga de ametralladora en su pecho, a un Salvador Allende asesinado con planificación fría, a un Pablo Neruda dejado morir por negársele atención médica, durante cinco días, para que ocurriera específicamente eso: que muriera.

Ahora o nunca

Pero no fueron sólo los altos mandos militares chilenos los que se reunieron rápidamente después de la noche del 4 de marzo de 1973. Los dirigentes máximos de la Sociedad de Fomento Fabril, de la Sociedad Nacional de Agricultura y de la Confederación Nacional de la Producción y el Comercio también lo hicieron. Y en sus reuniones, la tesis que habían planteado después del paro de octubre de 1972, quedó reconfirmada, La tesis de que «es imposible derribar a Salvador Allende por medios constitucionales». Es decir, que el fracaso de los políticos tipo Frei y Jarpa para cumplir con el encargo de la oligarquía y el imperialismo norteamericano, demostrado en octubre, había vuelto a demostrarse en marzo.

Se decidió entonces concentrar todos los esfuerzos en empujar a las Fuerzas Armadas contra Allende. Los monopolistas industriales, comerciales, financieros y agrícolas de Chile razanaron de dos maneras:

1) Solamente si hay un verdadero caos económico, político y social las Fuerzas Armadas se verán obligadas a intervenir y depondrán a Allende.

2) Una vez depuesto Allende, las Fuerzas Armadas se encar-

garán de mantener el orden social, político y económico y nosotros planificaremos una nueva forma de desarrollo del país.

El día 28 de marzo —veinticuatro horas después de que Salvador Allende admitiera la sugerencia de los generales y cambiara de nuevo la composición de su Gabinete, sacando de él a los representantes de las Fuerzas Armadas—, Orlando Sáenz, presidente de la Sociedad de Fomento Fabril, hace publicar en «El Mercurio» su intervención de dos días antes como memoria anual de su gestión, en la que se encuentran las líneas generales de los razonamientos aprobados.

Sáenz dice que «la salida de las Fuerzas Armadas del Gabinete» prueba que «ellas han repudiado al Gobierno», porque significa el caos para una nación y eso atenta contra su seguridad y soberanía. Dice que «el propósito de los marxistas» es «destruir a Chile», de modo que no hay que extrañarse de la gravísima crisis económica que afecta al país, Y señala que la única salida es un Gobierno «integrador», «fuerte y eficaz», que «haga del Estado un árbitro, pero no un monopolista que asfixie», que tenga la participación activa del «poder gremial», es decir, de las organizaciones de grandes empresarios. Con vocación de profeta, Orlando Sáenz indica que es importante «estar preparados» porque los días que vendrán serán muy difíciles, graves y críticos; en ellos «se decidirá quién triunfa en Chile, si el caos marxista o la democracia». Pide a todos los «demócratas» del país luchar sin descanso, sin tregua, hasta vencer al marxismo», y señala el buen deseo de que «el Presidente de la República escuche nuestras voces».

Pero ésta era sólo la forma pública, o publicable en un periódico como «El Mercurio», cabeza de serie de la conspiración civil, de algo mucho más concreto. Orlando Sáenz, en representación de la Sociedad de Fomento Fabril, había pedido a Eduardo Frei, que a fines de mayo sería elegido Presidente del Senado de Chile, y por lo tanto en «la línea de sucesión de Allende» si éste era declarado «inhábil» para el cargo por el Congreso, que cumpliera una tarea especial, en cooperación con su ex ministro de Defensa, Juan de Dios Carmona. La tarea era entrar en conversaciones «precisas, francas y directas» con el general Oscar Bonilla Bradanovic para formar un esquema de derrocamiento de Allende y para pedirle que él, como «buen amigo de ambos», hablara con los generales Carlos Prats y Augusto Pinochet para plantearles las mismas ideas.

Por su parte, Jorge Fontaine, en representación de la Con-

federación Nacional de la Producción y el Comercio, se contactó con los políticos nacionales Onofre Jarpa, presidente de ese partido; Patricio Phillips y Pedro Ibáñez Ojeda, todos senadores, para que «se acerquen» al comandante en jefe de la Fuerza Aérea, César Ruiz Danayau; al comandante de la Primera Zona Naval, vicealmirante José Toribio Merino; y al general de división Manuel Torres de la Cruz.

Se les dijo a estos políticos que había que hablarles con franqueza a los generales y almirantes, y garantizarles una «gran campaña publicitaria» en favor de «un Gobierno de las Fuerzas Armadas». Que ellos (la Sociedad de Fomento Fabril y demás organizaciones empresariales) pondrían en práctica la difusión de la idea «poder militar» en contra de la de «poder popular». Que se encargarían de crear dificultades constantes de transporte, comercialización y producción, de tal manera que el aparato productivo nacional se paralizaría completamente. Que, siguiendo las instrucciones que los generales pudieran dar, ellos, pondrían sus órganos de prensa («El Mercurio», Canal 13 TV de la Universidad Católica, radios Minería, Balmaceda, Cooperativa, Sociedad Nacional de Agricultura, etc.) para «desprestigiar» a quienes ellos deseasen, y «prestigiar» a quienes quisiesen, si eso ayudaba a los propósitos finales.³

También se les dijo que garantizasen a los generales «un rápido aumento en el desprestigio de Allende entre los trabajadores», porque las organizaciones sindicales controladas por los partidos demócratacristiano y nacional «promoverán un aumento de las huelgas exigiendo mayores salarios y sueldos».

Pero no sólo con los políticos hablaron los dirigentes de la oligarquía chilena. Hablaron también con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Enrique Urrutia Manzano, latifundista expropiado y accionista de media docena de monopolios industriales. Le pidieron que iniciara una campaña de declaraciones para poner en duda «la legalidad» de las actuaciones del Gobierno, y que hablara con «los mandos militares que usted pueda», para influirlos en una decisión que «sirva para librarnos del Gobierno de Allende». Lo mismo hicieron con el controlador general de la República, Héctor Humeres, para que redoblara sus esfuerzos en declarar fuera de la ley todas las adquisiciones, requisiciones o intervenciones en las industrias monopólicas por parte del Estado.

El último día de marzo de 1973, una vez más, la oligarquía chilena y el imperialismo de los Estados Unidos habían puesto

a todos sus peones en el punto de partida para una nueva carrera contra el Gobierno constitucional de Chile. Pero, al revés que en ocasiones anteriores, ahora estaban realmente **TODOS** los peones del sistema en el punto de partida.